



DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

TRÁMITE IV y IX)

35198/2018 TANIA SÁNCHEZ GUZMAN, PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.  
35199/2018 NOTIFICADORES PARTICIPES Y ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN  
35200/2018 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DELPRIMER CÍRCULO. RA 563/2017  
35201/2018 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO EN TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE). Se remiten tres legajos de pruebas en copia certificada.  
35202/2018 DIRECTOR JURÍDICO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)  
35203/2018 SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS TLALPAN (AUTORIDAD RESPONSABLE)

EN LOS AUTOS DEL EVENIMIENTO...  
IVO AL JUICIO DE AMPARO 739/2017-IX, PROMOVIDO  
SE DICTÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:

Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la Actuaría Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en que remite los autos originales del juicio de amparo 739/2017, en un tomo y tres legajos de pruebas, y el testimonio con seis copias, de la resolución dictada en sesión de tres de agosto de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión RA. 563/2017, en que resolvió lo siguiente:

PRIMERO. SE CONFIRMA la sentencia recurrida.  
SEGUNDO. SE SOBREESE en el juicio de amparo indirecto 739/2017 del índice del Juzgado Mixto de...

Materia Administrativa en la Ciudad de México, promovido por  
en contra de los actos y autoridades precisadas  
razones expuestas en el último considerando de esta resolución.  
[...]

#### SE CONFIRMA RECEPCIÓN

Por tanto, gírese oficio a las autoridades responsables, a efecto de notificarles la aludida resolución y confirmarse la recepción del oficio de cuenta y sus anexos al Tribunal oficiente.

Asimismo, gílose el cuaderno de antecedentes, previo desglose y destrucción de las copias simples obtenidas para formato ya que su conservación es innecesaria.

#### ANOTACIONES Y ARCHIVO

Por otra parte, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y una vez que se recaben las constancias de notificación del presente proveído, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, ello, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo.

Toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en virtud de que mediante resolución respectiva se sobreescribió el presente juicio y, además, en consideración de este juzgador no tiene relevancia documental para ser resguardado; por tanto, una vez que transcurran cinco años, pídese a su destrucción, en cumplimiento al punto y acuerdo antes mencionados.

Atento a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo Décimo Primero del multicitado acuerdo, se hace constar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL y, por tanto, si es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, según lo previsto en los puntos Segundo, fracciones VI y XVI, y Vigésimo Primero fracción II; luego, una vez que transcurran los plazos de tres y cinco años, trátese su transferencia y destrucción, respectivamente, de conformidad a los diversos puntos Décimo fracción I, Décimo Primero, Décimo Octavo y Vigésimo Primero fracción II de dicho ordenamiento.

#### SE DEVUELVEN DOCUMENTOS ORIGINALES

Por otra parte, ya que en el presente expediente sí obran glosados documentos originales, con apoyo en lo establecido en el Punto Vigésimo, fracción III último párrafo, del multicitado Acuerdo, REQUÉRASE a la parte quejosa, para dentro del término de noventa días, comparezca en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

#### DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS

En otro orden de ideas, toda vez que de autos se advierte que mediante proveído de veintinueve de junio y primero de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridades de la Delegación Tlalpan, remitieron copia certificada de los expedientes identificados con los números "UNO", "DOS" y "TRES", a su lugar de origen, por conducto del Director General Jurídico y de Gobierno, en la Delegación Tlalpan, sin que sea necesario se confirmación de recepción, ya que su conservación es innecesaria atento a lo aquí resuelto.

#### REALÍCESE ACUERDO INCIDENTAL

En consecuencia, realícese el acuerdo correspondiente en los cuadernos incidentales.

#### NOTIFIQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

Así lo proveo, así firma Rodrigo de la Peza López Figueroa, Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a doce de agosto de dos mil diecisiete, que da fe. DOS FIRMAS ILEGIBLES.  
Lo que comunico a Usted para su conocimiento y efectos legales conducentes.

43/17  
21 AGO 2018  
DIRECCIÓN JURÍDICA  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS TLALPAN

21 AGO 2018  
SUBDIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y REGLAMENTOS TLALPAN

R.A.- 563/2017  
AMPARO EN REVISIÓN

QUEJOSA Y RECURRENTE.

[REDACTED]

MAGISTRADO PONENTE:  
OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ.

SECRETARIA:  
SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.



Ciudad de México, acuerdo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión celebrada el día tres de agosto de dos mil dieciocho.

V I S T O S, para resolver el recurso de revisión de amparo R.A.- 563/2017 interpuesto por [REDACTED]

[REDACTED], por conducto de su autorizado [REDACTED] en contra de la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, engrosada el cinco de octubre siguiente, en el juicio de amparo indirecto 739/2017 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; y,

R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, compareció [REDACTED]

[REDACTED], por conducto de su representante legal [REDACTED], a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

**"AUTORIDADES RESPONSABLES:**

- a) Jefa Delegacional en Tlalpan.*
- b) Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan.*
- c) Director Jurídico de la Delegación Tlalpan.*
- d) Subdirección de Verificación y Reglamentos en Tlalpan.*

**ACTO RECLAMADO:**

- a) La duplicidad de procedimientos administrativos de verificación en materia de construcciones y edificaciones por la misma cosa.*
- b) La imposición de medidas cautelares de clausura por tiempo indeterminado derivadas de una duplicidad de procedimientos sin mediar una resolución.*
- c) La omisión... para resolver y emitir una resolución en atención al segundo procedimiento, ya que desde el catorce de enero de dos mil dieciséis se llevó a cabo la audiencia de ley de alegatos y ofrecimiento de pruebas y desde ese día no se ha dictado resolución alguna.*
- d) La omisión... para pronunciarse respecto del escrito presentado el 27 de marzo de 2017; y*
- e) Las omisiones y acciones que derivan como consecuencia jurídica de los actos reclamados."*

**SEGUNDO.-** En su demanda de garantías la quejosa designó como autorizado en términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado *Carlos Iván*

*Gómez Ortiz*. Asimismo, narró los antecedentes del asunto que consideró necesarios e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes en relación a sus derechos fundamentales y garantías consagradas en los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 7, numeral 1, 8, 21, 24 y 25, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como, 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos

**TERCERO.-** De dicha demanda de garantías correspondió conocer por razón de turno, al Juzgado **Noveno** de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México cuyo Titular en auto de **treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete**, ordenó su registro con el número de expediente **739/2017**, y acordó lo siguiente:

✚ **Desechar de plano la demanda** respecto de los actos reclamados consistentes en: *a)* el inicio y la duplicidad de dos procedimientos administrativos en la materia de construcciones y edificaciones; y, *b)* por la imposición de las medidas cautelares de clausura por tiempo indeterminado.

✚ **Admitir a trámite la demanda** respecto a los restantes actos reclamados.

**CUARTO.-** Por curso presentado el **veintisiete de julio de dos mil diecisiete**, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, compareció la **ausencia** **[REDACTED]** por conducto de su **[REDACTED]**, a

formular ampliación de su demanda de garantías en contra de las autoridades y por los actos que enseguida se precisan:

"AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS:

- a) *Director General Jurídico y de Gobierno en Tlalpan.*
- b) *Director Jurídico de la Delegación Tlalpan.*

AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS:

- a) *Tania Sánchez Guzmán en su carácter de Personal Especializado en Funciones de Verificación del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA).*

ACTOS RECLAMADOS:

1. *DEL DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, SE RECLAMA:*

- a) *La ilegal emisión de la Orden de Clausura para Construcciones de fecha 06 de junio de 2017 dentro del Procedimiento Administrativo TLP/DJ/SVR/VA-CyE/705/2015, derivada de una supuesta Resolución Administrativa, la cual, a la fecha no me ha sido notificada.*

- b) *La ilegal emisión del Acta de Clausura para Construcciones de fecha 06 de junio de 2017, dentro del Procedimiento Administrativo TLP/DJ/SVR/VA-CyE/705/2015.*

2. *DEL DIRECTOR JURÍDICO DE LA DELEGACIÓN TLALPAN, SE RECLAMA:*

- a) *La ilegal emisión de la Orden de Clausura para Construcciones de fecha 06 de junio de 2017, dentro del Procedimiento Administrativo TLP/DJ/SVR/VA-CyE/705/2015 derivada de una supuesta Resolución Administrativa, la cual, a la fecha no me ha sido notificada.*

- b) *La ilegal emisión del Acta de Clausura para Construcciones de fecha 06 de junio de 2017, dentro del Procedimiento Administrativo TLP/DJ/SVR/VA-CyE/705/2015.*

DE LA AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO:

1.- DE LA C. TANIA SÁNCHEZ GUZMÁN EN SU CARÁCTER DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (INVEA), SE RECLAMA:

a) *La ilegal ejecución del Acta de Clausura para Construcciones de fecha 06 de junio de 2017, dentro del Procedimiento Administrativo TLP/DJ/SVRVA-CYE/705/2015, por medio de la cual se colocaron los sellos de clausura en el predio que por esta vía defiendo.*”

**QUINTO.-** En auto de veintidós de junio de dos mil diecisiete, el Juez Federal del conocimiento previno a la quejosa; Y, en proveído de treinta y uno de julio del mismo año, acordó lo siguiente:

⇨ **Desechar de plano la ampliación de demanda respecto del acto reclamado consistente en la emisión y notificación del oficio DGODU/DDU/1916/2016 de dos de agosto de dos mil dieciséis,** atribuido al Director de Desarrollo Urbano en Tlalpan.

⇨ **Admitir a trámite la demanda respecto de los demás actos reclamados que señalaron en los escritos de ampliación y desahogo.**

**SEXTO.-** Concluido el trámite, previos diferimientos, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, engrosada el cinco de octubre siguiente

(fojas 357 a 367 del juicio de origen), resolución que concluyó con el punto resolutivo que a la letra dice:

***“ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.”***

**SÉPTIMO.-** En contra de dicho fallo, la quejosa **House Sale Inmobiliaria, sociedad anónima de capital variable**, por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, [REDACTED], interpuso el presente **recurso de revisión** del que correspondió conocer, por razón de turno, a este **Tercer Tribunal Colegiado** en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente en auto de **quince de noviembre de dos mil diecisiete, lo admitió** a trámite, ordenó su registro con el número de expediente **R.A.- 563/2017** y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

**OCTAVO.-** Mediante proveído de Presidencia de este Tribunal Colegiado, de **veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete**, se turnaron los presentes autos a la ponencia del **Magistrado Osmar Armando Cruz Quiroz**, para la formulación del proyecto de resolución respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Amparo.

**NOVENO.-** En acuerdo de **doce de diciembre de dos mil diecisiete**, el Presidente de este Tribunal determinó que el presente asunto encuadra en lo ordenado en el artículo 4 del Acuerdo General 30/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hizo del conocimiento de las partes que se enviaría al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Primer Circuito, a fin de que emitiera la resolución correspondiente, hasta su archivo definitivo y se le solicitó el acuse de recibo correspondiente.

**DÉCIMO.-** El Presidente de este Órgano Jurisdiccional en auto de **veintitrés de febrero de dos mil dieciocho**, señaló que por oficio número TTCMA-380/2017 se envió el presente asunto con tres legajos al **Vigésimo Primer** Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sin que haya acusado el recibo correspondiente; por lo que le solicitó su remisión y en diverso proveído de **uno de marzo siguiente**, tuvo por recibido dicho acuse.

**DÉCIMO PRIMERO.-** Por acuerdo de **quince de marzo de dos mil dieciocho**, el Presidente de este Tribunal tuvo por recibido el oficio número 2166/2018 procedente del **Vigésimo Primer** Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual devolvió el presente expediente **R.A.-563/2017**, el juicio de amparo 739/2017 y tres legajos, de conformidad con el punto de acuerdo **10/2018-XII** emitido en sesión de veintiséis de febrero del mismo año, por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.

**DÉCIMO SEGUNDO.-** En el mismo acuerdo de **quince de marzo de dos mil dieciocho**, ordenó devolver los autos a la ponencia del Magistrado **Osmar Armando Cruz Quiroz**, para la formulación del proyecto de resolución respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Amparo.



## CONSIDERANDO:

**PRIMERO.-** Este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 84 de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Punto Quinto, fracción I, inciso C), del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, habida cuenta que se interpone en contra de un fallo dictado en la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia celebrada en un juicio de amparo indirecto, por un Juez Distrito cuya materia y jurisdicción corresponde conocer a este Tribunal.

**SEGUNDO.-** El recurso de revisión lo interpone parte legítima, toda vez que se trata de [REDACTED], quien es la quejosa en el juicio de amparo de origen y lo hace por conducto de su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley

de Amparo, [REDACTED] personería que tuvo por reconocida el Juez a quo en el auto admisorio de la demanda de fecha **treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete** (foja 393 del juicio de garantías).

**TERCERO.-** El presente recurso se interpuso dentro del término de diez días que al efecto prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, habida cuenta que el fallo recurrido se notificó a la quejosa el **once de octubre de dos mil diecisiete** (foja 373 del juicio de garantías), por lo que surtió efectos el día hábil siguiente, es decir el **dieciséis de octubre del mismo año**, y el plazo legal transcurrió del **diecisiete al treinta de octubre de dos mil diecisiete**, debiendo descontarse de dicho cómputo los días: **doce, trece, catorce, quince, veintuno, veintidós, veintiocho y veintinueve del mismo mes y año**, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Circular 25/2017 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de seis de octubre de dos mil diecisiete.

Luego, si el recurso de revisión se presentó el **veintisiete de octubre de dos mil diecisiete**, es oportuno pues aún no fenecía el término legal para ello.

**CUARTO.-** Para el estudio y resolución del asunto se entrega a los Magistrados copia certificada de la sentencia recurrida y del escrito en que se hacen valer los agravios; quedando a su disposición para su consulta el expediente del juicio de amparo indirecto **739/2017** del índice del Juzgado

**Noveno** de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y el toca en que se actúa, al que se agregará copia certificada de la resolución impugnada.

**QUINTO.-** Es menester precisar que no se transcribe la sentencia recurrida, ni los agravios propuestos en su contra, por no ser un requisito exigido en el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que obra inserto en el escrito integrado al presente recurso de revisión, siendo innecesario reproducirlo atento a lo establecido en la tesis de jurisprudencia **2a./J. 58/2010** sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

**"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de

*legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”*

*(Registro: 164618. Novena Época. Segunda Sala. Jurisprudencia 2a./J. 58/2010. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830.)*

De igual forma, este Órgano Jurisdiccional estima pertinente aclarar que las jurisprudencias y tesis invocadas o citadas en la presente ejecutoria, se aplican en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, ya que el criterio imperante en ellas se sigue sustentando aun aplicando esta legislación; así como en lo establecido en la tesis de jurisprudencia que enseguida se transcribe:

**“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE**

**OBSOLETA.** La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 10. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto.”

(Registro: 2010982. Décima Época. Segunda Sala. Jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 705.)

**SEXTO.-** Las consideraciones en que se fundó la sentencia que se recurre, son las que enseguida se sintetizan:

#### **1.-) PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS.-**

- ❖ Omisión de emitir resolución en el segundo procedimiento, pues desde el catorce de enero del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley, de alegatos y ofrecimiento de pruebas, sin que se haya dictado resolución alguna.
- ❖ La omisión de pronunciarse respecto del escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecisiete.
- ❖ Las omisiones y acciones que derivan como consecuencia, jurídica de los actos reclamados.

Así como los siguientes actos y su ejecución:

- ❖ Acta de clausura de construcción de seis de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente TLP/DJ/SVRVA-CyE/705/2015.

- ❖ Acta de reposición de sellos de clausura en materia de construcción de catorce de julio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente TLP/DJ/SVRVA-CyE/705/2015.

Actos por lo que se admitió la ampliación de demanda.

- ❖ La emisión de la resolución administrativa JUDEMC/752/2017, en el procedimiento TLP/DJ/SVRVA-CyE/705/2015.
- ❖ La emisión y ejecución de la orden de clausura para construcciones dentro del procedimiento administrativo TLP/DJ/SVRVA-CyE/705/2015.
- ❖ La emisión de la orden de inspección y reposición de sellos de clausura en materia de construcción de catorce de julio del dos mil diecisiete.
- ❖ El procedimiento administrativo TLP/DJ/SVRVA-CyE/705/2015.
- ❖ La emisión de la resolución administrativa JUDEMC/752/2017 de seis de junio de dos mil diecisiete en el procedimiento administrativo TLP/DJ/SVRVA-CyE/705/2015.
- ❖ La emisión de la orden de inspección y reposición de sellos de clausura en materia de construcciones de catorce de julio de dos mil diecisiete, ejecutada el diecisiete siguiente.
- ❖ El procedimiento administrativo TLP/DJ/SVRVA-CyE/705/2015.
- ❖ La notificación por cédula de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, con la que se pretendió notificar la resolución administrativa TLP/DJ/SVRVA-CyE/705/2015.

❖ La ejecución y emisión del acta de clausura para construcciones de seis de junio de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento TLP/DJ/SVRVA-CYE/705/2015, por el que se colocaron los sellos de clausura.

## 2.-) CERTEZA DE ACTOS RECLAMADOS.-

Al rendir sus respectivos informes con justificación las autoridades responsables: Apoderado General para la Defensa Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México en la Delegación Tlalpan en representación de la Jefa Delegacional en Tlalpan, del Director General Jurídico y de Gobierno de Tlalpan, del Director Jurídico de la Delegación de Tlalpan y del Subdirección de Verificación y Reglamentos de Tlalpan negaron categóricamente los actos que se les reclaman.

No obstante tal negativa, del propio informe justificado se advierte que señalan su intervención en el asunto, con motivo de una denuncia ciudadana y la emisión de la resolución TLP/DJ/SVRVA-CYE/705/2015, lo que se corrobora de las documentales remitidas en dos tomos que anexaron las responsables a sus informes justificados, **por lo que dicho acto, se tiene como plenamente probado.**

Asimismo, **son ciertos** los actos reclamados a la Directora de lo Contencioso y Amparo, encargada de la defensa jurídica del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, en representación de Personal Especializado en funciones de Verificación del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, toda vez que así lo reconoció al rendir su informe con justificación.

### 3.-) CAUSAS DE IMPROCEDENCIA.-

Las autoridades responsables del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México señalan que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque en contra de los actos reclamados procede el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

**Es fundada** la causa de improcedencia invocada, ya que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías es improcedente cuando el acto reclamado lo emite una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa mediante el cual puede ser revocado, anulado o modificado; siempre y cuando, conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos con la interposición del recurso o medio de defensa, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, sin importar si el acto en sí mismo es o no susceptible de ser suspendido.

Por otro lado, de los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal y 31, fracción I, de Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal establecen que el superior jerárquico de las autoridades responsables es competente para conocer mediante recurso de inconformidad respecto de los actos que ordenen, ejecuten o traten de ejecutar sus subordinados; y que las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México son competentes para conocer mediante juicio de nulidad,



los actos que dicten ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en agravio de personas físicas o morales.

En ese tenor, se considera que respecto de los actos reclamados consistentes en el acta de clausura y el acta de reposición de sellos, debe agotarse previo al juicio de amparo indirecto, el recurso de inconformidad ante el superior jerárquico de la autoridad responsable, o bien el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en razón de que el acto que se controvierte proviene de una autoridad administrativa, perteneciente al Gobierno de la Ciudad de México, distinta de aquéllas del orden jurisdiccional, administrativo o del trabajo, y los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México y el 31, fracción I, de Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, prevén un medio ordinario de defensa, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado.

Consecuentemente, si el acto cuya constitucionalidad se debate, se hace consistir en esencia, en las actas de clausura y la colocación de sellos de clausura, es inconcuso que, previo a la promoción del amparo, debió instarse el recurso de inconformidad o bien el juicio de anulación, con el fin de dar cabal observancia al principio de definitividad.

Además, en el caso no opera alguna de las excepciones al principio invocado, previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ni en la

tesis 2a. LV/2000 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro:

**“DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.”**

Así es, no se actualiza ninguna de las causas de excepción del principio de definitividad, por lo siguiente:

1) Porque la quejosa **no es tercero extraño**, pues los actos reclamados derivan de una clausura ordenada en una resolución, de la cual la quejosa tenía conocimiento previo pues en el capítulo de antecedentes del acto reclamado en su demanda así lo manifestó bajo protesta de decir verdad.

2) Los actos que reclama **no son de imposible reparación**, ya que pueden ser nulificados mediante el juicio de nulidad.

3) Los **requisitos para suspender el acto reclamado no son mayores** que los previstos en la Ley de Amparo, son similares.

Cita la jurisprudencia 2a./J. 125/2011 (9a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro:

**“TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL LA LEY ORGÁNICA RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE PREVIO AL JUICIO DE AMPARO DEBE PROMOVERSE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE AQUEL.”**

4) El acto reclamado **no es del orden penal**.

5) **No se reclama alguna ley**.

6) **No se está en alguno de los casos que importen peligro** de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.

7) La Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, prevé la suspensión de los actos con la interposición del recurso correspondiente, así como la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.

8) El acto reclamado está fundado en los artículos 99, párrafo segundo de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en relación con el artículo 15 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, como se advierte del acta de reposición y/o ampliación de sellos, de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete (foja 148 del legajo de pruebas).

9) No se aducen sólo violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se advierte de los conceptos de violación esgrimidos contra los actos reclamados, pues en ellos se combate contravención a la normatividad local aplicable.

Cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Séptima Época, de rubro:

**“RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.”**

10) El medio de defensa legal, por virtud del cual se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentra previsto en una ley que regula su existencia.

Como se anunció, se surte la causa de improcedencia invocada por la autoridad responsable, por tanto, **procede sobreseer en el juicio** de conformidad con el artículo 61, fracción XX, en relación con el 63, fracción V de la Ley de Amparo.

**SÉPTIMO.-** La quejosa recurrente esgrime en sus agravios los argumentos que a continuación se sintetizan:

**1.-) PRIMERO.-** Aduce que indebidamente el Juez a quo estimó que se actualiza la causa improcedencia consistente en no haber agotado el principio de definitividad, el cual no puede considerarse que opere en el caso, pues señala que en su demanda de amparo sólo hizo valer violaciones directas a la Constitución Federal, tales como la infracción a sus derechos de petición, de debido proceso, de fundamentación y motivación y al principio *non bis idem*, consagrados en los artículos 8, 14, 16 y 23 de la Carta Magna; y, derivado de ello, los actos reclamados transgreden y son contrarios a la legislación específica, es decir, son nulos.

Cita las tesis de Tribunales Colegiados de rubros:

**“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.”**

**“DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.”**

Señala, que el artículo 61, penúltimo párrafo, de la fracción XX de la Ley de Amparo, dispone que no existe obligación de agotar recursos o medios de defensa previo al juicio de garantías: 1) Si el acto reclamado carece de fundamentación, 2) Cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o, 3) Cuando el recurso o medio de defensa lo prevea un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, siendo que en caso, operan los primeros dos supuestos.

Indica, que los actos reclamados carecen de una correcta fundamentación y motivación, lo que viola la seguridad y certeza jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional,

por lo que colige que la excepción al principio de definitividad opera de manera idónea, toda vez que los actos reclamados violentan de manera directa las referidas garantías y la deja en un completo estado de indefensión.

Cita la tesis de Tribunal Colegiado, de epígrafe:

**“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO EN CASO DE FALTA DE.”**

Concluye, que por lo anterior, estima evidente que los actos reclamados violan de forma directa sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que con la determinación del a quo al no hacer un enfoque detallado de las violaciones manifestadas en la demanda la ha dejado en un estado de indefensión.

**2.-) SEGUNDO.-** Expresa que el considerando tercero del fallo recurrido le causa agravio **ya que es evidente que si son ciertos los actos que se reclamaron a las autoridades responsables** y que dichos actos violan sus derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 23 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 numeral 2, 7, numeral 1, 2, 8, 21, 22, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Adoptada en San José Costa Rica; 4 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el “Protocolo de San Salvador”, doliéndose de que el Juez Federal no analizó de los actos que se reclamaron en la demanda inicial de amparo, así como de la ampliación de demanda, lo que la deja en estado de indefensión, al no examinar las violaciones al debido proceso, que afectan su esfera jurídica y económica.

3.-) SEGUNDO (sic).- Esgrime que en razón de los hechos narrados, le causa agravio que el a quo no entrara al estudio de lo aducido en su demanda de amparo y en la ampliación a ésta, ya que en su primer concepto de violación hizo valer la infracción al principio non bis in idem consagrado en el artículo 23 constitucional, toda vez que está siendo juzgada dos veces por lo mismo.

4.-) TERCERO (sic).- Arguye que las autoridades responsables violentan la garantía del artículo 16 constitucional ya que los actos reclamados carecen de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener.

Añade, que las autoridades responsables fueron omisas en señalar las razones para llevar acabo el Procedimiento Administrativo TLP/DJ/SVR/VA-CyE/705/2015 y emitir de forma extemporánea la resolución administrativa JUDEMC/752/2017 en su contra, en la que le impone una multa del 5% del valor de la construcción y la clausura total del predio, sin fundar los motivos o las causas de ello.

5.-) CUARTO (sic).- Señala que los actos reclamados violan sus derechos humanos consagrados en el artículo 16 Constitucional que prevé que nadie puede ser molestado en sus posesiones, en su domicilio y en su persona, sino mediante una resolución que previo provenga de un debido procedimiento, y que en su caso así lo determine y que esta se encuentre firme, es decir que en contra de esta no exista ningún medio de defensa, por lo cual en el caso concreto la autoridad responsable al emitir el documento "Cédula de Notificación" por medio del cual supuestamente le notificó la resolución administrativa del veintiuno de

marzo del dos mil diecisiete, así como el contenido de ella la deja en estado de indefensión, sin la oportunidad de defenderme, ofrecer pruebas, y sobre todo afecta su esfera jurídica y económica; generando la incertidumbre jurídica y dejándola en estado de indefensión.

6.-) QUINTO (sic).- Indica, que no obstante lo anterior, también le causa agravio la emisión del documento "*Cédula de Notificación*", toda vez que se dirige a una persona incierta y a un domicilio que no es el correcto, pues se cita la [REDACTED] cuando su domicilio correcto es el ubicado en [REDACTED], esquina con [REDACTED]. Delegación Tlalpan, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, es decir, que la resolución administrativa se notificó en otro lugar que no es el correcto y que tampoco está señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, lo cual evidentemente carece de validez.

7.-) SEXTO (sic).- Argumenta que le causa agravio el contenido de la resolución administrativa de fecha veintiuno de marzo del dos mil diecisiete, ya que lo determinado en su considerando tercero **no coincide con el informe previo de las autoridades responsables**, que manifestaron que se dio inicio al procedimiento administrativo a través de un recorrido que hizo la Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan en la obra que defiende, sin embargo; al emitir la resolución reclamada nunca se manifestó que por esa razón haya dado el origen al Procedimiento Administrativo TLP/DJ/SVR/VA-CYE/705/2015 el cual dio inicio el veintisiete de noviembre del dos mil quince, sino al

contrario manifestó que se habían encontrado algunas deficiencias en el Registro de Manifestación de Construcción **RG/TL/2099/2017**, lo que carece de lógica y pone en duda los motivos y las razones que tuvieron para dar inicio al procedimiento administrativo.

Agrega, que en el informe previo las autoridades responsables señalaron que el Registro de Manifestación de Construcción había quedado caduco; sin embargo, ni en el informe previo, ni en la resolución administrativa informan de las supuestas deficiencias o razones por las cuales ha quedado caduco dicho registro, por lo que claro que carece de fundamentación y motivación.

**OCTAVO.-** Son ineficaces los agravios que hace valer la quejosa recurrente en atención a los razonamientos que enseguida se explican.

En efecto los dos primeros agravios que se esgrimen son ineficaces por infundados, pues respecto del primero de ellos, debe destacarse que contrario a lo que se aduce, la determinación del Juez de Distrito de sobreseer en el juicio por no haberse agotado el principio de definitividad fue apegada a derecho, como se precisa enseguida.

Así es, contrario a lo sostenido por la recurrente, en su demanda de amparo y en la ampliación de esta no se adujeron únicamente violaciones a la Constitución Federal pues si bien es cierto que en su **primer concepto de violación** hizo valer la transgresión al principio non bis in ídem consagrado en el artículo 23 de la Carta Magna, no menos



cierto es que **en el segundo** invocó la infracción a los artículos 93, fracción I y 95 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, así a los numerales 35, 36 y 37 del Reglamento de Verificación Administrativa; y, 18, 57 y 60, tercer párrafo, de la Ley Federal de procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la citada en primer término, por estimar que habían caducado las facultades de la autoridad administrativa.

Ahora, en la **ampliación de demanda de amparo**, la enjuiciante, de nuevo, hizo valer **en su primer concepto de violación** la infracción al principio non bis in ídem previsto en el artículo 23 de la Constitución Federal, mientras que **en segundo adujo** violación a la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 del Pacto Federal, mientras que en tercero manifestó la transgresión al debido proceso previsto en el artículo 14 de la Carta Magna, **derivado de la violación a los** artículos 93, fracción I y 95 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, así a los numerales 35, 36 y 37 del Reglamento de Verificación Administrativa; y, 18, 57 y 60, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria al ordenamiento legal primeramente citado, pues estimó que debió archivar el asunto administrativo a solicitud expresa de la promovente, por haber caducado las facultades de la autoridad administrativa.

De igual forma, en el **cuarto concepto de violación** de la ampliación en comentario, se combatió la notificación de la resolución administrativa por infringir lo dispuesto en el artículo

80 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México; en tanto que **en el quinto alude**, a la contradicción entre lo resuelto en el tercer considerando de la resolución reclamada y lo manifestado en el informe previo de las autoridades responsables, relativo al origen del procedimiento, es decir, las razones que motivaron su inicio, destacando que el registro de manifestación de construcción que defiende cumple con las formalidades previstas en los artículos 41, 51, 53 y 54 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

Asimismo, en el **sexto concepto de violación** de la referida ampliación de demanda, la quejosa manifestó que la resolución administrativa que dio origen a la orden de clausura para construcciones del procedimiento administrativo TLP/DJ/SVRVA-CYE/705/2015 no le fue notificada debidamente; finalmente, en el **séptimo concepto de violación** señaló que las autoridades responsables actúan con dolo y mala fe al mantener clausurado su inmueble mediante la orden y acta de reposición de sellos de clausura, por lo que estima indispensable que se le *“otorgue la suspensión provisional, la suspensión definitiva y en su oportunidad procesal el amparo y protección de la Justicia Federal...”*

Expuesto lo argüido por la quejosa en su demanda de garantías y en la ampliación de ésta, resulta inconcuso que no hizo valer únicamente violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual no encuadra en el supuesto de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y

evidencia lo ineficaz por infundado de su primer agravio, por lo que concluye, que al no haber agotado los medios de defensa ordinarios en contra de los actos reclamados, como determinó el Juez de Distrito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, imponiéndose el sobreseimiento en el juicio.

El segundo agravio que esgrime la impetrante es **ineficaz por inoperante** habida cuenta que por una parte, la certeza de los actos reclamados no fueron el motivo del sobreseimiento en el juicio de origen y por otro lado, el Juez a quo estableció la certeza de tales actos, sin que pueda ser materia de estudio las violaciones que invoca a sus derechos humanos, toda vez que se reitera que se sobreseyó en el juicio y por ende, no se analizó el fondo del asunto.

Se citan de manera ilustrativa, por analogía, en lo conducente y por su sentido las siguientes tesis:

**“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN.**

**LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de**

*Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su*

*proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.*

*(Registro: 195741. Novena Época. Segunda Sala. Jurisprudencia 2a./J. 52/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, página 244.)*

**“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda**

vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido.”

(Registro: 2010501. Décima Época. Primera Sala, Tesis Aislada 1a. CCCLXXI/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, página 981.)

**“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO.** Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo.”

(Registro: 200412. Novena Época. Primera Sala. Jurisprudencia 1a./J. 10/96. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 109.)

Los restantes agravios que esgrime la quejosa recurrente **son ineficaces por inoperantes** al constituir una mera reiteración de los conceptos de violación que hizo valer tanto en su demanda de garantías, como en la ampliación de ésta, pues se limita a repetir lo que adujo en

contra de los actos reclamados, pretendiendo demostrar su ilegalidad, sin controvertir los motivos y fundamentos de la sentencia que recurre, como se evidencia del cuadro comparativo que enseguida se inserta:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN	AGRAVIOS
	PRIMERO. Causa agravio el contenido de la Resolución de la Audiencia Constitucional de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, misma que determinó:  ÚNICO: Se sobresee el juicio de amparo.
	Lo anterior es así, toda vez que de conformidad con el cuarto el a quo aduce una causal de improcedencia con fundamento en el principio de definitividad, de lo anterior es preciso señalar y tener en consideración que en el caso concreto, no se configura dicho principio, ya que en atención a los conceptos de violación se advierte que los actos reclamados constituyen violaciones directas a la Constitución, tales como:
	1. La violación al principio Non Bis Idem, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
	2. Reiteradas violaciones al debido proceso, garantía prevista en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
	3. La falta de una debida fundamentación y motivación, violatorio del artículo 16 Constitucional.
	4. Transgresión al derecho de petición consagrado en el artículo 8 Constitucional.



Es por ello, que de conformidad con lo aducido en mi demanda de amparo, así como lo señalado en el presente recurso, se colige que la excepción al principio de definitividad opera de manera idónea, toda vez que los actos reclamados violentan de manera directa las garantías previstas en el artículo 14 y 16 constitucional, lo que me deja en un completo estado de indefensión.

Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes:

**“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO EN CASO DE FALTA DE.”**  
(Se transcribe.)

Por los argumentos que han sido vertidos, es evidente que los actos que se reclaman a las Autoridades Responsables son violaciones directas a mis derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que con la determinación del A quo al no hacer un enfoque detallado de las violaciones manifestadas en las demandas me ha dejado en un estado de indefensión.

**SEGUNDO.** Ahora bien, causa agravio el considerando tercero de la resolución administrativa, ya que es evidente que si son ciertos los actos que se reclamaron a las Autoridades Responsables y que dichos actos transgreden mis derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, fracción I, 23 y 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 5 numeral 2, 7 numeral 1, 8, 21, 22 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Adoptada en San José Costa Rica; artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos





<p>materia administrativa, lo anterior con fundamento en el siguiente criterio jurisprudencial:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>materia administrativa, lo anterior con fundamento en los siguientes criterios jurisprudenciales, que a la letra señalan:</p>
<p>"NON BIS IN ÍDEM. ESTE PRINCIPIO NO PUGNA CON LA IMPOSICIÓN DE VARIAS SANCIONES EN LA RESOLUCIÓN CONCLUSIVA DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA." (Se transcribe.)</p>	<p>"NON BIS IN ÍDEM. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE, POR EXTENSIÓN, AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR." (Se transcribe.)</p>
<p>En virtud de lo anterior, y en atención a los HECHOS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, responsable y competente en materia de verificación, viola el principio NON BIS IN ÍDEM, toda vez que mi representada está siendo juzgada dos veces por lo mismo.</p>	<p>En virtud de lo anterior, y en atención a los HECHOS previamente mencionados, se desprende que las autoridades responsables, violentaron el principio NOM BIS IN ÍDEM, toda vez que mi representada está siendo juzgada dos veces por lo mismo.</p>
<p>En ese sentido, nuevamente se señala que, de conformidad con el primer procedimiento administrativo, la atribuciones y con fecha 17 de agosto de 2015, inició un procedimiento administrativo con motivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables, mismo que resolvió en los siguientes términos:</p> <hr/> <hr/> <hr/>	<p>En ese sentido es de resultar que, de conformidad con el primer procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la autoridad en el pleno ejercicio de sus atribuciones y con fecha 17 de agosto de 2015, inició un procedimiento administrativo de verificación, mismo que resolvió en los siguientes términos:</p> <hr/> <hr/> <hr/>
<p><b>PRIMERO.</b> Por las razones de hecho y de derecho descritas en el Considerando Tercero de la presente resolución, es procedente poner fin al procedimiento administrativo con fundamento en el artículo 87, fracción I, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenándose se archive el expediente como asunto total y</p>	<p><b>"PRIMERO:</b> Por las razones de hecho y de derecho descritas en el Considerando Tercero de la presente resolución, es procedente poner fin al procedimiento administrativo con fundamento en el artículo 87 fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenándose se archive el expediente como asunto total y</p>

definitivamente concluido.	definitivamente concluido.
<p>Del cual, la autoridad resolvió la no imposición de sanciones, toda vez que mi representada se encontraba en cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y demás ordenamientos aplicables.</p>	<p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>
<p>No obstante, tal y como se señala en los hechos 8 y 9, y según consta en el expediente administrativo No. TLP/DJ/SVR/VA-CyE_PC/0705/2015, la autoridad responsable, con fecha 27 de noviembre de 2015, con meses de posterioridad, ordenó nuevamente un procedimiento administrativo de verificación, el cual también tiene por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, mismo que hasta la fecha no ha sido resuelto por dicha autoridad responsable.</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>	<p>No obstante, tal y como se señala en los hechos 8 y 9, y según consta en el expediente administrativo No. TLP/DJ/SVR/VA-CyE_PC/0705/2015, la autoridad responsable, con fecha 27 de noviembre de 2015, (con solo dos meses de posterioridad) ordenó nuevamente un procedimiento administrativo de verificación, el cual también tenía por objeto verificar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, cuyo cumplimiento ya había quedado debidamente acreditado.</p> <p>En adición, las Autoridades dolosamente pretenden fundamentar su procedimiento administrativo mediante el DGODU/DDU/305/2017 de fecha 20 de enero del 2017, oficio que fue emitido el 20 de enero del 2017, más de un año después del inicio del procedimiento administrativo.</p>
<p>En virtud de lo anterior, es claro y evidente que mi representada, no solamente está siendo sometida por más de una ocasión a un procedimiento para determinar nuevamente su responsabilidad (misma que ya fue resuelta), sino también, se desprende que la autoridad responsable ha excedido en demasía el término para emitir una resolución, por lo que en el siguiente concepto de violación expongo y acredito la continua transgresión a mis derechos humanos y garantías individuales.</p>	<p>En virtud de lo anterior, es claro y evidente que mi representada, no solamente está siendo sometida por más de una ocasión a un procedimiento para determinar su responsabilidad (misma que ya fue resuelta), sino también, se desprende que la autoridad responsable excedió en demasía el término para emitir una resolución, por lo que en el siguiente concepto de violación continuó exponiendo y acreditando la incesante transgresión a mis derechos humanos y garantías individuales.</p>

SEGUNDO. En virtud de lo señalado con anterioridad; se desprende que la Autoridad Responsable, no solamente no ha actuado de manera diligente, sino ha dejado a mi representada en un completo estado de indefensión e incertidumbre respecto su situación jurídica, ya que ha excedido los plazos en los que debió haber emitido resolución. En consecuencia, mi representada no ha podido continuar realizando sus actividades, debido al estado de clausura indefinida que guarda el inmueble objeto de los referidos procedimientos, vulnerando su esfera jurídica y económica de manera irreparable.

No obstante lo anterior, es de resaltar que fenecidos en exceso los plazos para emitir resolución, mi representada mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2017, solicitó a la autoridad responsable, aclarar su situación jurídica, a lo cual, a la fecha de presentación de la presente demanda, la autoridad responsable no ha emitido respuesta y/o resolución.

En ese orden de ideas y ante tal desconcierto, mi representada, nuevamente promovió el escrito de fecha 11 de mayo de 2017, en virtud del cual, se solicitó a la Autoridad Responsable, con copia de conocimiento al Órgano Interno de Control, la caducidad del expediente administrativo, toda vez que como se ha señalado en múltiples ocasiones la inactividad por parte de la Autoridad Responsable ha excedido los plazos previstos, configurando así, la caducidad del procedimiento.

En tal virtud, y toda vez que la Autoridad no ha realizado actividad alguna dentro del procedimiento administrativo, resulta aplicable lo







los actos reclamados carecen de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, consintiendo dicha garantía en que se debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto del que se trata encuadra en la hipótesis normativa que se invoca, no se cumple con dicha garantía, con la simple invocación que haga la autoridad de un cuerpo de disposiciones legales, por ser la fundamentación y la motivación inherentes a todo acto de autoridad.	los actos reclamados carecen de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, consintiendo dicha garantía en que se debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto del que se trata encuadra en la hipótesis normativa que se invoca, no se cumple con dicha garantía, con la simple invocación que haga la autoridad de un cuerpo de disposiciones legales, por ser la fundamentación y la motivación inherentes a todo acto de autoridad.
<p>En ese tenor, entendiendo por fundamentación se deben expresarse con precisión el y los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por motivación la expresión con su debida precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que el caso concreto se configure la hipótesis normativa.</p> <p>En tal virtud, la responsable fue y es omisa en señalar las razones que tuvo para llevar acabo el Procedimiento Administrativo TL/P/DJ/SVR/VA-CyE/705/2015 emitir extemporáneamente Resolución JUDEMC/752/2017 en mi contra, por medio de la cual se impone una multa del 5% del valor de mi construcción, así como la CLAUSURA TOTAL de mi predio, sin que realmente fundamentara los</p>	<p>En ese tenor, entendiendo por fundamentación se deben expresarse con precisión el y los preceptos legales aplicables al caso concreto; y por motivación la expresión con su debida precisión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que el caso concreto se configure la hipótesis normativa.</p> <p>En tal virtud, la responsable fue y es omisa en señalar las razones que tuvo para llevar acabo el Procedimiento Administrativo TL/P/DJ/SVR/VA-CyE/705/2015 emitir extemporáneamente Resolución JUDEMC/752/2017 en mi contra, por medio de la cual se impone una multa del 5% del valor de mi construcción, así como la CLAUSURA TOTAL de mi predio, sin que realmente fundamentara los</p>



motivos o las causas y el origen del inicio del Procedimiento Administrativo y la emisión de la Resolución del mismo, lo anterior es así, va que en el contenido del considerando tercero de la resolución administrativa en comento, se desprende que la autoridad responsable pretende fundamentar las razones que tuvo para iniciar el procedimiento administrativo y emitir la Resolución en comento, con los siguientes argumentos, los cuales carecen de una prelación lógica:	motivos o las causas y el origen del inicio del Procedimiento Administrativo y la emisión de la Resolución del mismo, lo anterior es así, ya que en el contenido del considerando tercero de la resolución administrativa en comento, se desprende que la autoridad responsable pretende fundamentar las razones que tuvo para iniciar el procedimiento administrativo y emitir la Resolución en comento, con los siguientes argumentos, los cuales carecen de una prelación lógica:
<p>"... TERCERO: ...Que del análisis del contenido del Acta de Visita de Verificación TLP/DJSVR/VA-CYE/705/2017, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, levantada por el Personal Especializado en Funciones de Verificación se desprende que al momento de la visita el visitado exhibió los documentos que quedaron descritos en el resultando segundo de la presente resolución, para acreditar la legalidad de las obras que consisten en: dos cuerpos constructivos los cuales constan de un semisótano y tres niveles, superficie del predio 785 m2 (setecientos ochenta y nuco metros cuadrados) superficie construida al momento 350 m2 (trescientos cincuenta metros cuadrados), cuenta con un semisótano, la superficie de desplante es de 244 m2 (doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados) g) cuenta con tres niveles y semisótano, asimismo y toda vez que, el C. [REDACTED] realizó observaciones mediante escrito de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, en el que señala que "...que el inmueble ubicado en calle [REDACTED] cuenta con la documentación necesaria</p>	<p>"... TERCERO: ...Que del análisis del contenido del Acta de Visita de Verificación TLP/DJSVR/VA-CYE/705/2017,, de fecha veintisiete de noviembre de dos mil quince, levantada por el Personal Especializado en Funciones de Verificación se desprende que al momento de la visita el visitado exhibió los documentos que quedaron descritos en el resultando segundo de la presente resolución, para acreditar la legalidad de las obras que consisten en: dos cuerpos constructivos los cuales constan de un semisótano y tres niveles, superficie del predio 785 m2 (setecientos ochenta y cinco metros cuadrados) superficie construida al momento 350 m2 (trescientos cincuenta metros cuadrados), cuenta con un semisótano, la superficie de desplante es de 244 m2 (doscientos cuarenta y cuatro metros cuadrados) g) cuenta con tres niveles y semisótano, asimismo y toda vez que, el C. [REDACTED] realizó observaciones mediante escrito de fecha cuatro de diciembre de dos mil quince, en el que señala que "...que el inmueble ubicado en calle [REDACTED] con la documentación necesaria</p>

indicada en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en vigor", asimismo en la audiencia de [REDACTED]	indicada en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal en vigor", asimismo en la audiencia de [REDACTED]
Manifiestación de Construcción Tipo B número de folio <b>RG/TIJ2099/2015</b> , de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, diecisiete planos arquitectónicos y once estructurales, con sello de Ventanilla Única de fecha cuatro de septiembre de 2015, bitácora de obra, con sello de Ventanilla Única de fecha cuatro de septiembre de 2015, original de Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio No. <b>2173-151GAEN15</b> , de fecha veintidós de enero del año dos mil quince, original de Aviso de realización de Obras que no requieren Manifestación de Construcción, con folio <b>1411-5-14</b> , de fecha quince de junio de dos mil quince y original de Autorización de Programa Interno de Protección Civil con REF: <b>DT/ID/PC/2104/PE/0967/2015</b> , no obstante lo anterior con fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, mediante el oficio número <b>DGODU/DDU/305/2017</b> , la Lic. P.T. Laura Noemí Muñiz Benítez, Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, informa que con fecha ocho de septiembre de 2015, ingreso ante Ventanilla Única el Registro de Manifestación de Construcción tipo B en la modalidad de obra nueva bajo el número de registro <b>RG/N/1/2099/2015</b> , correspondiente a predio ubicado en [REDACTED]	Manifiestación de Construcción Tipo B número de folio <b>RG/TL/2099/2015</b> , de fecha cuatro de septiembre de dos mil quince, diecisiete planos arquitectónicos y once estructurales, con sello de Ventanilla Única de fecha cuatro de septiembre de 2015, bitácora de obra, con sello de Ventanilla Única de fecha cuatro de septiembre de 2015, original de Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo folio No. <b>2173-151GAEN15</b> , de fecha veintidós de enero del año dos mil quince, original de Aviso de realización de Obras que no requieren Manifestación de Construcción, con folio <b>1411-5-14</b> , de fecha quince de junio de dos mil quince y original de Autorización de Programa Interno de Protección Civil con REF: <b>DT/JD/PC/2104/PE/0967/2015</b> , no obstante lo anterior con fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, mediante el oficio número <b>DGODU/DDU/305/2017</b> , la Lic. P.T. Laura Noemí Muñiz Benítez, Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, informa que con fecha ocho de septiembre de 2015, ingreso ante Ventanilla Única el Registro de Manifestación de Construcción tipo B en la modalidad de obra nueva bajo el número de registro <b>RG/TL/2099/2015</b> , correspondiente a predio ubicado en [REDACTED]
[REDACTED] en esta [REDACTED] derivado del análisis técnico y de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de Construcciones, se observaron algunas deficiencias, por lo que se emitió el oficio de prevención de trámite número <b>DGODH/DDUA 916/2016</b> de fecha 02 de agosto de 2016, en el cual se envió a la Ventanilla Única el 09	[REDACTED] en esta [REDACTED] derivado del análisis técnico y de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de Construcciones, se observaron algunas deficiencias, por lo que se emitió el oficio de prevención de trámite número <b>DGODU/DDU/1916/2016</b> de fecha 02 de agosto de 2016, en el cual se envió a la Ventanilla Única el 09

<p>de Septiembre de 2016, para que se notificara el solicitante, una vez transcurrido un periodo de tres meses a partir de la recepción del oficio por parte de la Ventanilla Única y dado que no se ejerció acción alguna en dicho lapso, <b>se determinó la caducidad</b> del procedimiento administrativo, de conformidad con el capítulo 7o artículo 93, fracciones I y II, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal a través del oficio DT/CV1/0047/16 de fecha 10 de enero de 2017, signado por el Coordinador de Ventanilla Única Delegacional. Por lo anterior se informa que el Registro de Manifestación de Construcción tipo "B" en la Modalidad de Obra nueva, para el predio ubicado en [REDACTED] se encuentra a la fecha caduco..."</p> <p><b>En razón de lo anterior, es evidente el dolo y mala fe en la que actúan las Autoridades Responsables, toda vez que, como se desprende del contenido de la Resolución Administrativa, el inicio del procedimiento administrativo fue el 27 de noviembre del 2015, y es hasta el 20 de enero del 2017 (un año después) que la Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, a través del oficio DGODU/DDU/305/2017 informó a la Dirección General Jurídica y de Gobierno en Tlalpan "que con fecha ocho de septiembre de dos mil quince se ingresó ante Ventanilla Única el Registro de Manifestación de Construcción tipo "B" bajo el número de registro RG/TL/2099/2015 (lo cual es incorrecto ya que dichos documentos se ingresaron el día cuatro de septiembre de dos mil quince, tal y como se acredita con los sellos de recibido de dicha autoridad) en el cual supuestamente se habían observado</b></p>	<p>de Septiembre de 2016, para que se notificara el solicitante, una vez transcurrido un periodo de tres meses a partir de la recepción del oficio por parte de la Ventanilla Única y dado que no se ejerció acción alguna en dicho lapso, <b>se determinó la caducidad</b> del procedimiento administrativo, de conformidad con el capítulo 7o artículo 93, fracciones I y II, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal a través del oficio DT/CVU/0047/16 de fecha 10 de enero de 2017, signado por el Coordinador de Ventanilla Única Delegacional. Por lo anterior se informa que el Registro de Manifestación de Construcción tipo "B" en la Modalidad de Obra nueva, para el predio ubicado en calle [REDACTED] se encuentra a la fecha caduco..."</p> <p><b>En razón de lo anterior, el hoy A quo se ha equivocado al determinar que el inicio del procedimiento dio inicio a través de una denuncia y/o queja ciudadana, ya que, como se desprende del contenido de la Resolución Administrativa, el inicio del procedimiento administrativo fue el 27 de noviembre del 2015, y es hasta el 20 de enero del 2017 (un año después) que la Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, a través del oficio DGODU/DDU/305/2017 informó a la Dirección General Jurídica y de Gobierno en Tlalpan "que con fecha ocho de septiembre de dos mil quince se ingresó ante Ventanilla Única el Registro de Manifestación de Construcción tipo "B" bajo el número de registro RG/TL/2099/2015 (lo cual es incorrecto ya que dichos documentos se ingresaron el día cuatro de septiembre de dos mil quince, tal y como se acredita con los sellos de recibido de dicha autoridad) en el cual supuestamente se habían observado</b></p>
---	---

<p>unas deficiencias". En ese sentido es ilógico y cuestionable que la Dirección General Jurídica y de Gobierno haya dado inicio al procedimiento administrativo en noviembre del 2015, un año antes de tener conocimiento de las diferencias del Registro de Manifestación de Construcción o del oficio emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan de fecha veinte de enero del dos mil diecisiete, motivo por el cual se pone en duda que es el fundamento los motivos que tuvieron las Autoridades Responsables para iniciar el Procedimiento Administrativo y por ende al haber emitido una Resolución Administrativa la cual afecta mi esfera jurídica económica. Asimismo, se pone en duda que supuestamente la Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan tuvo conocimiento del Registro de Manifestación de Construcción desde el 08 de septiembre del 2015, sin embargo, ellos manifiestan que es hasta el 02 de agosto del 2016 (nueve meses después) que se emitió el oficio de prevención de trámite DGODU/DDU/1916/2016, el cual BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD del cual, nunca fui notificado dicho oficio.</p>	<p>unas deficiencias". En ese sentido es ilógico y cuestionable que la Dirección General Jurídica y de Gobierno haya dado inicio al procedimiento administrativo en noviembre del 2015, un año antes de tener conocimiento de las deficiencias del Registro de Manifestación de Construcción o del oficio emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan de fecha veinte de enero del dos mil diecisiete, motivo por el cual se pone en duda que es el fundamento y los motivos que tuvieron las Autoridades Responsables para iniciar el Procedimiento Administrativo y por ende al haber emitido una Resolución Administrativa la cual afecta mi esfera jurídica y económica. Asimismo, se pone en duda que supuestamente la Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan tuvo conocimiento del Registro de Manifestación de Construcción desde el 08 de septiembre del 2015, sin embargo, ellos manifiestan que es hasta el 02 de agosto del 2016 (nueve meses después) que se emitió el oficio de prevención de trámite DGODU/DDU/1916/2016, el cual BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD del cual, nunca fui notificado dicho oficio.</p>
<p>No obstante lo anterior, y supuestamente como no se desahogó la prevención señalada y por haber transcurrido más de tres meses, las Autoridades Responsables determinaron decretar la Caducidad del Procedimiento Administrativo y supuestamente mediante el oficio DT/CVU/0047/16 de fecha 10 de enero del 2017 se notificó que el Registro de Manifestación de Construcción había caducado, lo cual BAJO PROTESTA DE DECIR</p>	<p>No obstante lo anterior, y supuestamente como no se desahogó la prevención señalada y por haber transcurrido más de tres meses, las Autoridades Responsables determinaron decretar la Caducidad del Procedimiento Administrativo y supuestamente mediante el oficio DT/CVU/0047/16 de fecha 10 de enero del 2017 se notificó que el Registro de Manifestación de Construcción había caducado, lo cual BAJO PROTESTA DE DECIR</p>

<p>VERDAD nunca se nos notificó ni este ni en los otros oficios mencionados con anterioridad, sin perjuicio de que en las constancias exhibidas como pruebas por las Autoridades Responsables no se desprende que haya alguna cédula de notificación y/o instructivo por medio del cual dichas Autoridades hayan notificado los oficios en mención, mismos que debieron haberse notificado en tiempo y forma para no dejarme en estado de indefensión.</p>	<p>VERDAD nunca se nos notificó ni este ni en los otros oficios mencionados con anterioridad, sin perjuicio de que en las constancias exhibidas como pruebas por las Autoridades Responsables no se desprende que haya alguna cédula de notificación y/o instructivo por medio del cual dichas Autoridades hayan notificado los oficios en mención, mismos que debieron haberse notificado en tiempo y forma para no dejarme en estado de indefensión.</p>
<p>Aunado lo anterior, resulta incongruente que supuestamente el 10 de enero de 2017, se haya dictado la caducidad del Registro de Manifestación de Construcción y el 20 de enero del 2017 la Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan apenas daba conocimiento a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de las supuestas deficiencias del Registro de Manifestación de Construcción, por lo que la pregunta inmediata es: ¿no supuestamente ya había quedado sin efectos el Registro de Manifestación de Construcción? Ahora bien y ante ello ¿cómo es posible que el Procedimiento Administrativo de Verificación Administrativa que dio inicio el 27 de noviembre del 2015 (un año antes de que la Dirección General Jurídica y de Gobierno) se enterara de dichas deficiencias o de que se enterara de que el Registro de Manifestación de Construcción había quedado "supuestamente" sin efecto?</p>	<p>Aunado lo anterior, resulta incongruente que supuestamente el 10 de enero de 2017, se haya dictado la caducidad del Registro de Manifestación de Construcción y el 20 de enero del 2017 la Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan apenas daba conocimiento a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de las supuestas deficiencias del Registro de Manifestación de Construcción, por lo que la pregunta inmediata es: ¿no supuestamente ya había quedado sin efectos el Registro de Manifestación de Construcción? Ahora bien y ante ello ¿cómo es posible que el Procedimiento Administrativo de Verificación Administrativa que dio inicio el 27 de noviembre del 2015 (un año antes de que la Dirección General Jurídica y de Gobierno) se enterara de dichas deficiencias o de que se enterara de que el Registro de Manifestación de Construcción había quedado "supuestamente" sin efecto?</p>
<p>Es evidente que las autoridades responsables tratan de fundamentar su Procedimiento Administrativo de manera absurda y de mala fe, por lo que se pone en duda la legalidad y validez del procedimiento</p>	<p>Es evidente que las autoridades responsables tratan de fundamentar su Procedimiento Administrativo de manera absurda y de mala fe, por lo que se pone en duda la legalidad y validez del procedimiento</p>

<p>administrativo, así como de su resolución administrativa, ya que las fechas y las acciones no concuerdan entre sí, lo que Sí es evidente, es que las autoridades responsables no contaban ni cuentan con los elementos para imputarme un incumplimiento, por lo que de manera presuntiva se aduce que fueron construyendo poco a poco las acciones para fundamentar y acreditar su procedimiento administrativo, y tener todo este tiempo clausurado mi predio, y que hoy como consecuencia han afectado de manera irreparable mi esfera económica y jurídica, así como la de mis trabajadores, que desde hace un año no han tenido trabajo.</p> <p>TERCERO. Los actos que se reclaman transgreden mis derechos humanos consagrados en el artículo 16 Constitucional, toda vez que la carta magna señala que nadie puede ser molestado en sus posesiones, en su domicilio y en su persona, sino mediante una resolución que previo provenga de un debido procedimiento, y que en su caso así lo determine y que esta se encuentre firme, es decir que en contra de esta no exista ningún medio de defensa, por lo cual en el caso concreto la autoridad responsable al emitir el documento "Cédula de Notificación" y por medio del cual supuestamente notificó indebidamente la Resolución Administrativa del veintuno de marzo del dos mil diecisiete, así como el contenido de ella me deja en estado de indefensión, sin la oportunidad de defenderme, ofrecer pruebas, y sobre todo afectándome en mi esfera jurídica y económica. Creando así la incertidumbre jurídica y dejándome hoy en un estado de indefensión.</p> <p>Lo anterior es así, dado que transgrede mi derecho de defensa, ya</p>	<p>administrativo, así como de su resolución administrativa, ya que las fechas y las acciones no concuerdan entre sí, lo que Sí es evidente, es que las autoridades responsables no contaban ni cuentan con los elementos para imputarme un incumplimiento, por lo que de manera presuntiva se aduce que fueron construyendo poco a poco las acciones para fundamentar y acreditar su procedimiento administrativo, y tener todo este tiempo clausurado mi predio, y que hoy como consecuencia han afectado de manera irreparable mi esfera económica y jurídica, así como la de mis trabajadores, que desde hace un año no han tenido trabajo.</p> <p>CUARTO. Los actos que se reclamaron transgreden mis derechos humanos consagrados en el artículo 16 Constitucional, toda vez que la carta magna señala que nadie puede ser molestado en sus posesiones, en su domicilio y en su persona, sino mediante una resolución que previo provenga de un debido procedimiento, y que en su caso así lo determine y que esta se encuentre firme, es decir que en contra de esta no exista ningún medio de defensa, por lo cual en el caso concreto la autoridad responsable al emitir el documento "Cédula de Notificación" y por medio del cual supuestamente notificó indebidamente la Resolución Administrativa del veintuno de marzo del dos mil diecisiete, así como el contenido de ella me deja en estado de indefensión, sin la oportunidad de defenderme, ofrecer pruebas, y sobre todo afectándome en mi esfera jurídica y económica. Creando así la incertidumbre jurídica y dejándome hoy en un estado de indefensión.</p> <p>Lo anterior es así, dado que transgrede mi derecho de defensa, ya</p>
--	---

<p>que ante un acto autoritario, no me pude defender, ya que en su momento se desconocían las causa y motivos que dieron lugar al origen a la violación de dicha garantía, violando las garantías del derecho a la vivienda, audiencia, legalidad y seguridad jurídica, ya que al existir medios de impugnación y de defensa ante la medida que impone no son susceptibles de ser ejecutados hasta en tanto estos medios sean agotados por el gobernado, dejando en estado de indefensión y a merced de los actos de autoridad, en donde al caso dichos actos son contrarios a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional, mismo que se señala textualmente, en su segundo párrafo, que a la letra dice: (se transcribe).</p> <p>Asimismo, se transgrede lo dispuesto por el artículo 14, segundo párrafo de la Carta Magna, en la cual refiere en lo conducente al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento: (se transcribe).</p> <p>En efecto, la garantía de legalidad y debido proceso consiste en que se debe otorgar a todo gobernado la oportunidad de tener derecho a una defensa privada al acto que tiende a ser privativo de la propiedad, en este caso mediante la notificación de la resolución administrativa de fecha veintuno de marzo del dos mil diecisiete, las autoridades responsables han determinado imponerme diversas sanciones económicas y sobre todo CLAUSURAR mi construcción sin motivo alguno y sin fundamento alguno, tales derechos entre otros son los siguientes:</p> <p>a) La notificación personal del inicio de un procedimiento y sus consecuencias.</p>	<p>que ante un acto autoritario, no me pude defender, ya que en su momento se desconocían las causa y motivos que dieron lugar al origen a la violación de dicha garantía, violando las garantías del derecho a la vivienda, audiencia, legalidad y seguridad jurídica, ya que al existir medios de impugnación y de defensa ante la medida que impone no son susceptibles de ser ejecutados hasta en tanto estos medios sean agotados por el gobernado, dejando en estado de indefensión y a merced de los actos de autoridad, en donde al caso dichos actos son contrarios a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional, mismo que se señala textualmente, en su segundo párrafo, que a la letra dice: (se transcribe).</p> <p>Asimismo, se transgrede lo dispuesto por el artículo 14 segundo párrafo de la Carta Magna, en la cual refiere en lo conducente al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento: (se transcribe).</p> <p>En efecto, la garantía de legalidad y debido proceso consiste en que se debe otorgar a todo gobernado la oportunidad de tener derecho a una defensa privada al acto que tiende a ser privativo de la propiedad, en este caso mediante la notificación de la resolución administrativa de fecha veintuno de marzo del dos mil diecisiete, las autoridades responsables han determinado imponerme diversas sanciones económicas y sobre todo CLAUSURAR mi construcción sin motivo alguno y sin fundamento alguno, tales derechos entre otros son los siguientes:</p> <p>a) La notificación personal del inicio de un procedimiento y sus consecuencias.</p>
---	--



<p>b) La oportunidad de ser representado por abogado o persona de confianza.</p> <p>c) Ofrecer y desahogar pruebas.</p> <p>d) La oportunidad de presentar alegatos.</p> <p>e) El dictado de una Resolución en que se dirime las cuestiones debatidas.</p> <p>Por lo que en el caso que nos ocupa, no se cumplieron con ese cúmulo de formalidades esenciales del procedimiento, que permitirán al suscrito defenderse y por lo tanto la privación de la disposición de mi vivienda a través de la clausura que ejecutó la Autoridad Responsable y la pretensión de hacerme efectiva diversas sanciones de multa.</p> <p><b>“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.”</b> (Se transcribe.)</p> <p>En virtud de lo señalado con anterioridad, se desprende que la autoridad responsable, no solamente no ha actuado de manera diligente, sino ha dejado a mi representada en un completo estado de indefensión e incertidumbre respecto su situación jurídica al exceder los plazos en los que debió haber emitido resolución. En ese sentido, mi representada no ha podido continuar realizando sus actividades debido al estado de clausura indefinida que guarda el inmueble objeto de los referidos procedimientos, vulnerando su esfera jurídica y económica de manera irreparable, así como al de sus trabajadores.</p> <p>No obstante, lo anterior, es de resaltar que fenecidos en exceso los plazos para emitir resolución, mi representada mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2017, solicitó a la autoridad responsable, aclarar su situación jurídica, a lo cual, a la fecha</p>	<p>b) La oportunidad de ser representado por abogado o persona de confianza.</p> <p>c) Ofrecer y desahogar pruebas.</p> <p>d) La oportunidad de presentar alegatos,</p> <p>e) El dictado de una Resolución en que se dirime las cuestiones debatidas.</p> <p>Por lo que en el caso que nos ocupa, no se cumplieron con ese cúmulo de formalidades esenciales del procedimiento, que permitirán al suscrito defenderse y por lo tanto la privación de la disposición de mi vivienda a través de la clausura que ejecutó la Autoridad Responsable y la pretensión de hacerme efectiva diversas sanciones de multa.</p> <p><b>“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.”</b> (Se transcribe.)</p> <p>En virtud de lo señalado con anterioridad, se desprende que la autoridad responsable, no solamente no ha actuado de manera diligente, sino ha dejado a mi representada en un completo estado de indefensión e incertidumbre respecto su situación jurídica al exceder los plazos en los que debió haber emitido resolución. En ese sentido, mi representada no ha podido continuar realizando sus actividades debido al estado de clausura indefinida que guarda el inmueble objeto de los referidos procedimientos, vulnerando su esfera jurídica y económica de manera irreparable, así como al de sus trabajadores.</p> <p>No obstante, lo anterior, es de resaltar que fenecidos en exceso los plazos para emitir resolución, mi representada mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2017, solicitó a la autoridad responsable, aclarar su situación jurídica, a lo cual, a la fecha</p>
--	--



<p>de presentación de la presente demanda, la autoridad responsable no había emitido la resolución administrativa.</p> <p>En ese orden de ideas y ante tal desconcierto, mi representada, nuevamente promovió el escrito de fecha 11 de mayo de 2017, en virtud del cual, se solicitó a la Autoridad Responsable, con copia de conocimiento a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, la caducidad del expediente administrativo, toda vez que como se ha señalado en múltiples ocasiones la inactividad por parte de la Autoridad Responsable ha excedido los plazos previstos, configurando así, la caducidad del procedimiento.</p> <p>En tal virtud, y toda vez que la Autoridad no ha realizado actividad alguna dentro del procedimiento administrativo, resulta aplicable lo previsto por los artículos 93, fracción I, 95 y demás relativos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los artículos 35, 36, 37 y demás relativos de la Reglamento de Verificación Administrativa, así como lo previsto por los artículos 18, 57 y 60, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por lo que el pronunciamiento aplicable al caso concreto, es el archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada.</p> <p>De lo anterior, sirve de apoyo lo dispuesto por el siguiente criterio jurisprudencial 1a. CLXI/2006 emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual señala:</p>	<p>de presentación de la presente demanda, la autoridad responsable no había emitido la resolución administrativa.</p> <p>En ese orden de ideas y ante tal desconcierto, mi representada, nuevamente promovió el escrito de fecha 11 de mayo de 2017, en virtud del cual, se solicitó a la Autoridad Responsable, con copia de conocimiento a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, la caducidad del expediente administrativo, toda vez que como se ha señalado en múltiples ocasiones la inactividad por parte de la Autoridad Responsable ha excedido los plazos previstos, configurando así la caducidad del procedimiento.</p> <p>En tal virtud, y toda vez que la Autoridad no ha realizado actividad alguna dentro del procedimiento administrativo, resulta aplicable lo previsto por los artículos 93, fracción I, 95 y demás relativos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los artículos 35, 36, 37 y demás relativos del Reglamento de Verificación Administrativa, así como lo previsto por los artículos 18, 57 y 60, tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria a la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), por lo que el pronunciamiento aplicable al caso concreto, es el archivo de las actuaciones, a solicitud de parte interesada.</p> <p>De lo anterior, sirve de apoyo lo dispuesto por el siguiente criterio jurisprudencial 1a. CLXI/2006 emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual señala:</p>
--	---

"CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTICULO 60, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." (Se transcribe.)	"CADUCIDAD DE FACULTADES DE LAS AUTORIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ARTICULO 60, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." (Se transcribe.)
<p>Ahora bien, la emisión de la Resolución Administrativa de fecha veintuno de marzo del dos mil diecisiete y su indebida notificación por medio de "Cédula de Notificación" de fecha veinticinco de mayo del dos mil diecisiete transmude mi derecho del debido proceso, aunado a que transgrede a lo señalado por los artículos 36 y 37 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), mismos que a la letra determinan lo siguiente: (se transcribe).</p> <p>En ese sentido, es evidente que las autoridades responsables no emitieron la resolución administrativa en tiempo y forma, transgrediendo así lo dispuesto por el artículo 36 y 37 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, toda vez que es evidente que la emisión de la Resolución Administrativa JUDEMC/752/2017 de fecha veintuno de marzo del dos mil diecisiete, y su indebida e ilegal notificación por medio de "Cédula de Notificación" del día veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, son totalmente ilegales e inconstitucionales y en contra a mi derecho al debido proceso y a mi derecho de una justicia pronta y expedita, ya que como se ha expuesto con fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince se llevó a cabo la visita de verificación, el cuatro de diciembre del dos mil quince en tiempo y forma se ingresó</p>	<p>Ahora bien, la emisión de la Resolución Administrativa de fecha veintuno de marzo del dos mil diecisiete y su indebida notificación por medio de "Cédula de Notificación" de fecha veinticinco de mayo del dos mil diecisiete transgrede mi derecho del debido proceso, aunado a que transgrede a lo señalado por los artículos 36 y 37 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), mismos que a la letra determinan lo siguiente: (se transcribe).</p> <p>En ese sentido, es evidente que las autoridades responsables no emitieron la resolución administrativa en tiempo y forma, transgrediendo así lo dispuesto por el artículo 36 y 37 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, toda vez que es evidente que la emisión de la Resolución Administrativa JUDEMC/752/2017 de fecha veintuno de marzo del dos mil diecisiete, y su indebida e ilegal notificación por medio de "Cédula de Notificación" del día veinticinco de mayo del dos mil diecisiete, son totalmente ilegales e inconstitucionales y en contra a mi derecho al debido proceso y a mi derecho de una justicia pronta y expedita, ya que como se ha expuesto con fecha veintisiete de noviembre del dos mil quince se llevó a cabo la visita de verificación, el cuatro de diciembre del dos mil quince en tiempo y forma se ingresó</p>

<p>ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno en Tlalpan mi escrito de observaciones y alegatos, con fecha catorce de enero del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de ley y es hasta el veintuno de marzo del dos mil diecisiete que se emitió la resolución administrativa (un año casi cinco meses después), por lo que es evidente que pasaron más de diez días después de la visita de verificación para que las autoridades responsables emitieran la resolución administrativa y su notificación, y no solo pasaron más de diez días sin emitir resolución, si no pasó más de un año cinco meses en que las autoridades responsables mantuvieron clausurado mi obra sin motivo alguno, lo cual como se ha mencionado ha afectado mi esfera jurídica y económica, así como la de mis trabajadores.</p> <p>CUARTO. No obstante lo anterior, también causa agravio la emisión del documento "Cédula de Notificación", toda vez que la misma va dirigida a una persona incierta y a un domicilio que no es el correcto, ya que va dirigida a [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] sin embargo, el domicilio correcto de donde es la obra verificada y donde debía ser notificada la resolución administrativa es el ubicado en [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] Delegación Ixtapalapa, Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Motivo por el cual es evidente que la resolución administrativa se notificó en otro lugar que no es el correcto y que tampoco está señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, lo cual es evidente que carece de validez la</p>	<p>ante la Dirección General Jurídica y de Gobierno en Tlalpan mi escrito de observaciones y alegatos, con fecha catorce de enero del dos mil dieciséis se llevó a cabo la audiencia de ley y es hasta el veintuno de marzo del dos mil diecisiete que se emitió la resolución administrativa (un año casi cinco meses después), por lo que es evidente que pasaron más de diez días después de la visita de verificación para que las autoridades responsables emitieran la resolución administrativa y su notificación, y no solo pasaron más de diez días sin emitir resolución, si no pasó más de un año cinco meses en que las autoridades responsables mantuvieron clausurado mi obra sin motivo alguno, lo cual como se ha mencionado ha afectado mi esfera jurídica y económica, así como la de mis trabajadores.</p> <p>QUINTO. No obstante lo anterior, también causa agravio la emisión del documento "Cédula de Notificación", toda vez que la misma fue dirigida a una persona incierta y a un domicilio que no es el correcto, ya que va dirigida a [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] sin embargo, el domicilio correcto de donde es la obra verificada y donde debía ser notificada la resolución administrativa es el ubicado en [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Motivo por el cual es evidente que la resolución administrativa se notificó en otro lugar que no es el correcto y que tampoco está señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, lo cual es evidente que carece de validez la</p>
--	---

notificación de la resolución administrativa y sus efectos.	notificación de la resolución administrativa y sus efectos.
<p>Asimismo, el documento "Cédula de Notificación" resulta violatorio a lo previsto por el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, toda vez la notificación se practicó con una persona que no conocemos, que no es la representante legal y ni está autorizado y sobre todo en un domicilio que desconocemos, por lo que el notificador debió dejar un citatorio ahora si con cualquier persona que se encontrara en el domicilio, para que el interesado lo esperara al día siguiente hábil, sin embargo; nunca se dejó un citatorio previo a la notificación por medio de "Cédula de Notificación", a pesar de que en el predio materia de la litis se encuentran varios trabajadores que pudieron recibir el citatorio.</p> <p>'Artículo 80.' (Se transcribe.)</p> <p>Al respecto, se debe señalar que el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, dispone que toda notificación personal se deberá entender con la persona que deba ser notificada, su representante legal o en su caso con el autorizado, y si estas no se encuentran en el domicilio, entonces se deberá DEJAR UN CITATORIO con la persona que atienda la misma, a efecto de que el interesado y/o el afectado tenga conocimiento que so le notificará un acto de autoridad y que se requiere su presencia en el domicilio correspondiente en el día y hora que se señale en el citatorio respectivo, a efecto de que espera al notificador y atienda la diligencia respectiva.</p> <p>No obstante lo anterior, lo antes citado no aconteció en el caso</p>	<p>Asimismo, el documento "Cédula de Notificación" resulta violatorio a lo previsto por el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, toda vez la notificación se practicó con una persona que no conocemos, que no es el representante legal y ni está autorizado y sobre todo en un domicilio que desconocemos, por lo que el notificador debió dejar un citatorio ahora si con cualquier persona que se encontrara en el domicilio, para que el interesado lo esperara al día siguiente hábil, sin embargo; nunca se dejó un citatorio previo a la notificación por medio de "Cédula de Notificación", a pesar de que en el predio materia de la litis se encuentran varios trabajadores que pudieron recibir el citatorio.</p> <p>'Artículo 80.' (Se transcribe.)</p> <p>Al respecto, se debe señalar que el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, dispone que toda notificación personal se deberá entender con la persona que deba ser notificada, su representante legal o en su caso con el autorizado, y si estas no se encuentran en el domicilio, entonces se deberá DEJAR UN CITATORIO con la persona que atienda la misma, a efecto de que el interesado y/o el afectado tenga conocimiento que se le notificará un acto de autoridad y que se requiere su presencia en el domicilio correspondiente en el día y hora que se señale en el citatorio respectivo, a efecto de que espera al notificador y atienda la diligencia respectiva.</p> <p>No obstante lo anterior, lo antes citado no aconteció en el caso</p>

concreto, toda vez que en el documento denominado "Cédula de Notificación" se desprende que la diligencia se llevó a cabo con la C. Ana María Paulín Hernández en su carácter de trabajadora, sin embargo esta persona no trabaja para nosotros, ni es la interesada, ni es la representante legal y tampoco está autorizada, por lo que el notificador debió dejar un citatorio con una persona a efecto de que el interesado o su representante legal estuvieran al día siguiente hábil para llevar a cabo la notificación, lo que no aconteció en la especie.	concreto, toda vez que en el documento denominado "Cédula de Notificación" se desprende que la diligencia se llevó a cabo con la C. Ana María Paulín Hernández en su carácter de trabajadora, sin embargo esta persona no trabaja para nosotros, ni es la interesada, ni es la representante legal y tampoco está autorizada, por lo que el notificador debió dejar un citatorio con una persona a efecto de que el interesado o su representante legal estuvieran al día siguiente hábil para llevar a cabo la notificación, lo que no aconteció en la especie.
Circunstancia por la que es claro que el notificador adscrito a La Dirección General Jurídico y de Gobierno no cumplió con las formalidades esenciales que establece el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, pues a pesar de que en dicho artículo establece que se debe dejar un citatorio si no se encuentra el propietario o el representante legal, o el domicilio se encuentra cerrado, el notificador omitió tal formalidad, pues pretendió notificar por "Cédula de Notificación" la Resolución Administrativa, por consiguiente la supuesta diligencia de notificación llevada a cabo de tales actos SON ILEGALES E INCONSTITUCIONALES, ya que no se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos marcados por la Ley aunado que en la misma se omitió anexar la supuesta Resolución Administrativa.	Circunstancia por la que es claro que el notificador adscrito a la Dirección General Jurídico y de Gobierno no cumplió con las formalidades esenciales que establece el artículo 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, pues a pesar de que en dicho artículo establece que se debe dejar un citatorio si no se encuentra el propietario o el representante legal, o el domicilio se encuentra cerrado, el notificador omitió tal formalidad, pues pretendió notificar por "Cédula de Notificación" la Resolución Administrativa, por consiguiente la supuesta diligencia de notificación llevada a cabo de tales actos SON ILEGALES E INCONSTITUCIONALES, ya que no se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos marcados por la Ley, aunado que en la misma se omitió anexar la supuesta Resolución Administrativa.
QUINTO. Ahora bien, causa agravio el contenido de la resolución administrativa de fecha veintuno de marzo del dos mil diecisiete, ya que en el considerando tercero de dicha resolución, la autoridad responsable determinó lo siguiente:	SEXTO. Ahora bien, causa agravio el contenido de la resolución administrativa de fecha veintuno de marzo del dos mil diecisiete, ya que en el considerando tercero de dicha resolución, la autoridad responsable determinó lo siguiente:

<p>"... con fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, mediante el oficio número <b>DGODIAWU/305/2017</b>, la Lic. P.T. Laura Noemí Muñiz Benítez, Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, informa que con fecha ocho de septiembre de 2015, ingresó ante Ventanilla Única el Registro de Manifestación de Construcción tipo B en la modalidad de obra nueva bajo el número de registro <b>RG/TL/2099/2015</b>, correspondiente a predio [REDACTED]</p> <p>[REDACTED] derivado del análisis técnico y de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de Construcciones, se observaron algunas deficiencias, por lo que se emitió el oficio de prevención de trámite número <b>DGODU/DDU/1916/2016</b> de fecha 02 de agosto de 2016, en el cual se envió a la Ventanilla Única el 09 de Septiembre de 2016, para que se notificara el solicitante, una vez transcurrido un periodo de tres meses a partir de la recepción del oficio por parte de la Ventanilla Única y dado que no se ejerció acción alguna en dicho lapso, se determinó la caducidad del procedimiento administrativo, de conformidad con el capítulo 7o artículo 93, fracciones I y II, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal a través del oficio <b>DT/CVU/0047A6</b> de fecha 10 de enero de 2017, signado por el Coordinador de Ventanilla Única Delegacional. Por lo anterior se informa que el Registro de Manifestación de Construcción tipo "B" en la Modalidad de Obra nueva, para el predio ubicado en ([REDACTED]) se encuentra a la fecha caduco..."</p> <p><b>Ahora bien, en razón de lo anterior y de conformidad al informe previo rendido por las autoridades responsables, ellos manifestaron que se dio inicio al procedimiento</b></p>	<p>"... con fecha veinte de enero de dos mil diecisiete, mediante el oficio número <b>DGODU/DDU/305/2017</b>, la Lic. P.T. Laura Noemí Muñiz Benítez, Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan, informa que con fecha ocho de septiembre de 2015, ingresó ante Ventanilla Única el Registro de Manifestación de Construcción tipo B en la modalidad de obra nueva bajo el número de registro <b>RG/TL/2099/2015</b>, correspondiente a predio ubicado en ([REDACTED])</p> <p>[REDACTED] derivado del análisis técnico y de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de Construcciones, se observaron algunas deficiencias, por lo que se emitió el oficio de prevención de trámite número <b>DGODU/DDU/1916/2016</b> de fecha 02 de agosto de 2016, en el cual se envió a la Ventanilla Única el 09 de Septiembre de 2016, para que se notificara el solicitante, una vez transcurrido un periodo de tres meses a partir de la recepción del oficio por parte de la Ventanilla Única y dado que no se ejerció acción alguna en dicho lapso, se determinó la caducidad del procedimiento administrativo, de conformidad con el capítulo 7o, artículo 93, fracciones I y II, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal a través del oficio <b>DT/CVU/004716</b> de fecha 10 de enero de 2017, signado por el Coordinador de Ventanilla Única Delegacional. Por lo anterior se informa que el Registro de Manifestación de Construcción tipo "B" en la Modalidad de Obra nueva, para el predio ubicado en ([REDACTED]) se encuentra a la fecha caduco..."</p> <p><b>Ahora bien, en razón de lo anterior y de conformidad al informe previo rendido por las autoridades responsables, ellos manifestaron que se dio inicio al procedimiento</b></p>
---	--

<p>administrativo a través de un recorrido que hizo la Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan en la obra de mérito, sin embargo, al momento de emitir la resolución respectiva nunca se manifestó que por esa razón o motivo se haya dado el origen al Procedimiento Administrativo TLP/DJ/SVR/VA-CyE/705/2015 el cual dio inicio el veintisiete de noviembre del tós mil quince, sino al contrario la autoridad responsable manifestó que a través del oficio PGQDU/DPJ/305/2017 de fecha veinte de enero del dos mil diecisiete la Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan informo a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan que si habían encontrado algunas deficiencias en el Registro de Manifestación de Construcción RG/TL/2099/2017 del 04 de septiembre de tós mil quince. Lo anterior carece de lógica y pone en duda los motivos y las razones que tuvieron las autoridades para dar inicio al Procedimiento Administrativo, ya que como se desprende ellos manifestaron que derivado del oficio de fecha veinte de enero del dos mil diecisiete, la Dirección General Jurídica y de Gobierno de Tlalpan se enteró de las supuestas deficiencias del Registro de Manifestación de Construcción tipo "B", sin embargo fue en noviembre del dos mil quince, cuando se dio inicio el procedimiento administrativo, por lo que se pone en duda cuales fueron los verdaderos motivos y fundamentos que tuvieron las autoridades responsables para el inicio del procedimiento administrativo en mención.</p> <p>Asimismo, en el <u>informe previo</u> las autoridades responsables manifestaron que el Registro de Manifestación de Construcción había quedado caduco, sin embargo ni en el informe previo,</p>	<p>administrativo a través de un recorrido que hizo la Dirección de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan en la obra de mérito, sin embargo, al momento de emitir la resolución respectiva nunca se manifestó que por esa razón o motivo se haya dado el origen al Procedimiento Administrativo TLP/DJ/SVR/VA-CyE/705/2015 el cual dio inicio el veintisiete de noviembre del dos mil quince, sino al contrario la autoridad responsable manifestó que a través del oficio DGODU/DDU/305/2017 de fecha veinte de enero del dos mil diecisiete la Directora de Desarrollo Urbano de la Delegación Tlalpan informó a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan que se habían encontrado algunas deficiencias en el Registro de Manifestación de Construcción RG/TL/2099/2017 del 04 de septiembre de dos mil quince. Lo anterior carece de lógica y pone en duda los motivos y las razones que tuvieron las autoridades para dar inicio al Procedimiento Administrativo, ya que como se desprende ellos manifestaron que derivado del oficio de fecha veinte de enero del dos mil diecisiete, la Dirección General Jurídica y de Gobierno de Tlalpan se enteró de las supuestas deficiencias del Registro de Manifestación de Construcción tipo "B", sin embargo fue en noviembre del dos mil quince, cuando se dio inicio al procedimiento administrativo, por lo que se pone en duda cuales fueron los verdaderos motivos y fundamentos que tuvieron las autoridades responsables para el inicio del procedimiento administrativo en mención.</p> <p>Asimismo, en el <u>informe previo</u> las autoridades responsables manifestaron que el Registro de Manifestación de Construcción había quedado caduco, sin embargo ni en el informe previo,</p>
--	--



<p>ni en la resolución administrativa hacen del conocimiento de las supuestas deficiencias y/o los motivos o razones por las cuales ha quedado caduco dicho Registro.</p> <p>No obstante lo anterior, en dicha resolución se manifiesta que supuestamente el 02 de agosto del 2016, nueve meses después de que se ingresaron los documentos y el Registro de Manifestación de Construcción tipo "B", supuestamente las autoridades administrativas se dieron cuenta de las deficiencias que tenía dicho Registro y supuestamente emitieron el oficio DGODU/DDU/1916/2016, sin embargo, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD nunca se nos notificó dicho oficio, es hasta este momento que tenemos conocimiento de dicho oficio. No omito mencionar que aun así, es dudable lo que se determina en dicha resolución por que no concuerdan las fechas, ya que si se dio inicio el procedimiento administrativo en noviembre del 2015, porque es hasta el 02 de agosto del 2016 (nueve meses después) que supuestamente la Dirección de Desarrollo Urbano se dio cuenta de las deficiencias del Registro de Manifestación de Construcción y sobre todo por qué es hasta el veinte de enero del 2017 que dan conocimiento a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan para que se llevara a cabo el inicio del Procedimiento de Verificación Administrativa, motivo por el cual se desprende y se acredita que dicho procedimiento administrativo está viciado desde un inicio, ya que carece de fundamentación y motivación, aunado a las diversas irregularidades dentro del procedimiento administrativo.</p> <p>Ahora bien, el Registro de Manifestación de Construcción</p>	<p>ni en la resolución administrativa hacen del conocimiento de las supuestas deficiencias y/o los motivos o razones por las cuales ha quedado caduco dicho Registro.</p> <p>No obstante lo anterior, en dicha resolución se manifiesta que supuestamente el 02 de agosto del 2016, nueve meses después de que se ingresaron los documentos y el Registro de Manifestación de Construcción tipo "B", supuestamente las autoridades administrativas se dieron cuenta de las deficiencias que tenía dicho Registro y supuestamente emitieron el oficio DGODU/DDU/1916/2016, sin embargo, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD nunca se nos notificó dicho oficio, es hasta este momento que tenemos conocimiento de dicho oficio. No omito mencionar que aun así, es dudable lo que se determina en dicha resolución por que no concuerdan las fechas, ya que si se dio inicio el procedimiento administrativo en noviembre del 2015, porque es hasta el 02 de agosto del 2016 (nueve meses después) que supuestamente la Dirección de Desarrollo Urbano se dio cuenta de las deficiencias del Registro de Manifestación de Construcción y sobre todo por qué es hasta el veinte de enero del 2017 que dan conocimiento a la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan para que se llevara a cabo el inicio del Procedimiento de Verificación Administrativa, motivo por el cual se desprende y se acredita que dicho procedimiento administrativo está viciado desde un inicio, ya que carece de fundamentación y motivación, aunado a las diversas irregularidades dentro del procedimiento administrativo.</p> <p>Ahora bien, el Registro de Manifestación de Construcción</p>
--	--



<p>RG/TL/2099/2015 de fecha 04 de septiembre de 2015, cumple con todas y cada una de las formalidades necesarias previstas en el artículo 47, 51, 53 y 54 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, tan es así que en el primer, procedimiento administrativo la Dirección General Jurídica y de Gobierno en Tlalpan de la Administración pasada resolvió a favor de la hoy parte quejosa, sin embargo; es hasta el cambio de Administración que nuevamente inician un Procedimiento Administrativo a solo dos meses después de la resolución del Primer Procedimiento, por lo que es evidente que las Autoridades Responsables han actuado con dolo y mala fe en este Procedimiento Administrativo, con la finalidad de conseguir con esto que se clause mi obra de manera definitiva, aun cuando mi obra se encuentra totalmente legal y cuenta con todos los documentos que amparan la legalidad de dicha obra y que a la fecha se encuentran vigente.</p> <p>SEXTO...</p> <p>SÉPTIMO....</p> <p>Por lo que se solicita a este H. Juzgado concedor se ... conceda el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el las Autoridades Responsable <u>dejen sin efectos la Resolución Administrativa de fecha 21 de marzo del 2017</u>, <u>dejen sin efectos la Cédula de Notificación de fecha 25 de mayo del 2017</u>, <u>dejen sin efectos la Orden de Clausura y el Acta de Clausura de fecha 06 de junio del 2017</u> y retiren los sellos de clausura impuestos en mi predio, y sobre todo dejen sin efectos el procedimiento administrativo TL/P/D/J/SVR/VA-CyE/0705/2015, asimismo dicten una resolución en la</p>	<p>RG/TL/2099/2015 de fecha 04 de septiembre de 2015, cumple con todas y; cada una de las formalidades necesarias previstas en el artículo 47, 51, 53 y 54 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, tan es así que en el primer procedimiento administrativo la Dirección General Jurídica y de Gobierno en Tlalpan de la Administración pasada resolvió a favor de la hoy parte quejosa, sin embargo; es hasta el cambio de Administración que nuevamente inician un Procedimiento Administrativo a solo dos meses después de la resolución del Primer Procedimiento, por lo que es evidente que las Autoridades Responsables han actuado con dolo y mala fe en este Procedimiento Administrativo, con la finalidad de conseguir con esto que se clause mi obra de manera definitiva, aun cuando mi obra se encuentra totalmente legal y cuenta con todos los documentos que amparan la legalidad de dicha obra y que a la fecha se encuentran vigente.</p> <p>En razón de lo anterior y por las violaciones directas a mis derechos humanos y/o garantías individuales, se solicita a H. Magistrado concedor se modifique la resolución dictada el veintiocho de septiembre del año en curso, y se otorgue el Amparo y Protección de la Justicia Federal al hoy quejoso y se deje sin efectos la Resolución Administrativa de fecha 21 de marzo del 2017, dejen sin efectos la Cédula de Notificación de fecha 25 de mayo del 2017, dejen sin efectos la Orden de Clausura y el Acta de Clausura de fecha 06 de junio del 2017 y retiren los sellos de clausura impuestos en mi predio, y sobre todo dejen sin efectos el procedimiento administrativo TL/P/D/J/SVR/VA-CyE/0705/2015, asimismo dicten una resolución en la</p>
--	--

<i>cual se acuerde la caducidad del procedimiento administrativo, toda vez que ya se había tenido una resolución favorable y ya ha pasado más de un año sin que las autoridades responsables dictaran en tiempo y forma la resolución correspondiente, lo anterior por ser violatorias de los derechos fundamentales y consecuentemente respecto de los demás actos derivados de la mismas.</i> ...	<i>cual se acuerde la caducidad del procedimiento administrativo, toda vez que ya se había tenido una resolución favorable y ya ha pasado más de un año sin que las autoridades responsables dictaran en tiempo y forma la resolución correspondiente, lo anterior por ser violatorias de los derechos consecuentemente respecto de los demás actos derivados de la mismas, ya que al no haber sido parte del procedimiento administrativo, en donde nunca fue oído ni vencido en juicio y/o en el procedimiento administrativo substanciado en la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la Delegación Tlalpan.</i>
--	---

Del preinserto cuadro comparativo se corrobora la inoperancia de agravios declarada, por la reiteración de los conceptos de violación esgrimida por la quejosa.

Se citan de manera ilustrativa, por analogía, en lo conducente y por su sentido las tesis de jurisprudencia que a la letra dicen:

**“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.**

Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida.”

(Registro: 2001825. Décima Época. Segunda Sala. Jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, octubre de 2012, Tomo 3, página 1326.)

**“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN.  
SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS  
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE  
ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR  
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA  
RECURRIDA.** Conforme al artículo 88 de la Ley de

Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida.”

(Registro: 166748. Novena Época. Segunda Sala. Jurisprudencia 2a./I. 109/2009. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, agosto de 2009, página 77.)

**“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN.  
SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN  
IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL  
EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.**

Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de

amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su

caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado.”

(Registro: 166031. Novena Época. Segunda Sala. Jurisprudencia 2a./J. 188/2009. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, noviembre de 2009, página 424.)

**“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno**

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el por qué estiman inconstitucionales o ilegales los



primer resultando de esta ejecutoria por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.

**NOTIFIQUESE**, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Juzgado de Distrito de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados: Osmar Armando Cruz Quiroz (Presidente), Jorge Ojeda Velázquez y Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.

Firman los Magistrados, con el Secretario de Tribunal, quien autoriza y da fe.

*SEMQ/msa\**

**MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE**  
(FIRMADO)

**OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ**

**MAGISTRADO**  
(FIRMADO)

**JORGE OJEDA VELÁZQUEZ**

**MAGISTRADO**  
(FIRMADO)

**MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL**

SECRETARIO DE TRIBUNAL  
(FIRMADO)

FRANCISCO JOSÉ ALVARADO DÍAZ



Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE.  
SECRETARIO DEL JUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MEXICO

LIC. Luis Daniel Roldán Jasso

